

ECONOMÍA

Cuatro años para reconvertir el carbón

● Bruselas confirma que no habrá más ayudas públicas para la minería a partir de 2015

Viene de primera página

Tras días de negociación, el comisario de Competencia consiguió darle la vuelta a una batalla que parecía perdida. El plan de ayudas al carbón diseñado por el Gobierno español, e impulsado directamente por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, había sido criticado en España por la propia Comisión Nacional de Competencia (CNC). También fue recurrido por las compañías eléctricas y hasta el propio Consejo de Estado pidió al Ejecutivo que no lo aplicara sin el permiso previo de Bruselas.

En el Gobierno temían que Bruselas tumbara su propuesta de ayudas públicas al carbón, en un momento además en el que el sector está en plena movilización por el impago de nóminas de algunos empresarios a los trabajadores.

Pero Almunia se ha batido el cobre para vencer a los que desde Bruselas querían jubilar ya esta industria por contaminante e ineficiente. Para satisfacción de Zapatero, que año tras año (éste no lo ha hecho) se ha erigido como el salvador de la minería de su tierra, León, en el mitin de Rodiezmo.

A propuesta del ex ministro de Felipe González, la Comisión aprobará hoy el plan del Gobierno español de beneficiar con un precio fijo y prioridad de acceso a las eléctricas que recurran al carbón nacional hasta 2014. El comisario de Medioambiente y la responsable de Cambio Climático se oponen a estas ayudas ligadas a la crisis actual y que pueden minar sus esfuerzos para acabar con la fuente energética más sucia de Europa, pero hasta Zapatero ha presionado personalmente a la Comisión.

No más prórrogas

Aunque en los últimos seis años España ha exportado electricidad, el Gobierno justifica el nuevo decreto de ayuda al carbón nacional por el peligro para el suministro por la dependencia del exterior, en particular mientras no exista una interconexión eléctrica con Francia que permita acceder al mercado europeo con más facilidad.

Fuentes de la Comisión explican a este diario que confían en el «compromiso político» ofrecido por el Gobierno de que no pedirá una prórroga del decreto. «La seguridad energética no es un cheque en blanco para los Estados miembros», asegura un experto comunitario.

Sobre la minería española se ciernen en paralelo dos normativas. El Real Decreto sobre garantía del suministro y el nuevo Reglamento que fija las ayudas públicas al sector.

Pese a la decisión de Bruselas, el Ministerio de Industria aprovechó la ocasión ayer para lanzar su campaña en defensa de las subvenciones y así poder seguir gastando cerca de 1.000 millones al año en un sector que emplea a casi 50.000 personas entre las minas y las empresas relacionadas.

Como temía el grupo ecologista



JOSE MANUEL GUTIÉRREZ

Marcha con final feliz. Los 200 mineros que partieron de Villablino hace una semana querían que el final de su caminata reivindicativa coincidiera con la huelga general y la respuesta definitiva de Bruselas. La

confirmación de la prórroga ha llegado un día antes. Aun así, los trabajadores del carbón (en la imagen, descansando en una discoteca de Hospital de Orbigo) harán hoy su entrada triunfal en León.

Fondos con fecha de caducidad

>Las subvenciones a la minería han caído en picado, a medida que el carbón perdía terreno como fuente de generación eléctrica. Aun así, los mineros percibieron directamente a través de sus nóminas 328 millones en 2008 y en torno a 280 el pasado año.

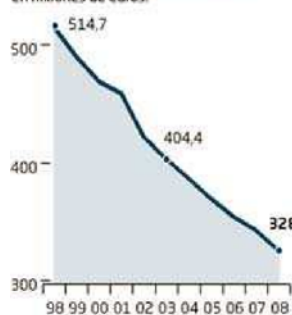
>Sin embargo, el conjunto de las ayudas destinadas al carbón es mucho más elevado. En 2009 superó los 1.630 millones, repartidos entre sueldos, becas, prejubilaciones o planes de reconversión.

WWF, el que más lobby hizo en contra del decreto, el apoyo al plan español puede perjudicar el esfuerzo general de la UE para acabar con las subvenciones públicas al carbón en los próximos cuatro años. La propuesta de la Comisión de cerrar las minas en pérdidas aún necesita la aprobación de los Veintiseis y España luchará con Alemania, también afectada, por alargar los plazos.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, aseguró ayer que España quiere ampliar las subvenciones hasta una década más para «una transición ordenada». «La propuesta de la Comisión no es aceptable. Queremos mantener nuestras ayudas públicas para un sector vital pa-

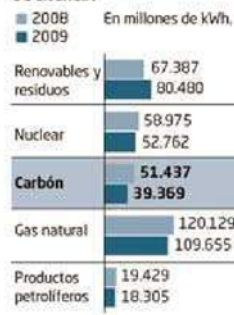
El papel del carbón en España

EVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS DIRECTAS
En millones de euros.



FUENTE: UNESA, Carbunión y elaboración propia.

LA GENERACIÓN POR FUENTES DE ENERGÍA
En millones de kWh.



Y. Clemente / EL MUNDO

Subvenciones anuales de 204.000 euros por minero

B. M. / Madrid

En 2009, la minería española recibió en torno a 1.630 millones de euros de ayudas públicas. Actualmente, en España trabajan poco más de 8.000 personas en la minería, de forma que según estos datos del pasado año, de las arcas del Estado y del recibo de la luz salieron hacia las cuencas mineras en torno a 204.000 euros brutos por cada minero. Pero el sueldo bruto anual de un trabajador de la mina se sitúa en una media de 40.000 euros brutos.

Así que sólo el 20% del dinero público llegó al bolsillo de los mineros (el coste de las nóminas rondó los 280 millones en 2009). El resto, es decir unos 1.350 millones, fue a parar a becas y ayudas a los hijos de los mineros, prejubilaciones, inversiones para la mejora de las infraestructuras de las zonas mineras y creación de alternativas de empleo en otros sectores. Y lo demás a los empresarios del sector. Pese a todo este dinero público, poco se ha avanzado en las comarcas mineras para ir sentando las bases para un cambio de modelo productivo y la sustitución progresiva de la ineficiente industria minera por otras actividades industriales y de servicios.

ra nuestro suministro energético más allá de 2014 e incluso más allá de 2018», explicó el ministro en Bruselas antes de reunirse con Almunia y con el comisario de Energía, el alemán Günther Oettinger. Aunque hay pocos países afectados por el plan de jubilación minera, según Sebastián, España cuenta con apoyos y los no afectados tampoco saldrán en defensa de la Comisión.

Industria les ha abierto expediente informativo para que expliquen el destino de ese dinero público y averiguar si hubo desvío de fondos a otras actividades de los empresarios que ahora no quieren pagar las nóminas.